

LUIS FERNEY MORENO CASTILLO\*

*La tríada regulatoria en América Latina*



La tríada regulatoria está representada por la regulación y la mejora regulatoria, por un lado; por otro, el cumplimiento normativo (*compliance*), y por otro, la fiscalización. Estos tres ángulos están estrechamente vinculados o relacionados, cada cual cumple un papel o una función, pero interrelacionados, lo que conlleva una verdadera transformación e innovación del Derecho Administrativo.

GRÁFICA I



Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica se muestra esta interrelación que configura una secuencia interdependiente que hemos denominado la tríada regulatoria, porque hoy en día no se puede mirar la regulación aislada sin considerar los procedimientos internos, protocolos y códigos de conductas, esto es, normas internas, que deben adoptar las organizaciones para el cumplimiento normativo o de la regulación (*compliance*), como tampoco apartado de la función administrativa que se cumple con la fiscalización, en palabras de Manuel Izquierdo Carrasco (Izquierdo Carrasco, 2019), de verificar de manera directa el cumplimiento normativo.

Antes, se hablaba de regulación como la función de dictar o producir normas; hoy, esta función está acompañada de la palabra mejoras regulatorias, la cual se refiere a mejoras en los procedimientos de dictar o producir normas y al lado de la regulación se encontraba la fiscalización, que es una función que vigila el grado de cumplimiento normativo acompañado de un régimen sancionatorio. Hoy en día, entre regulación y fiscalización aparece el

---

\* Abogado por la Universidad Externado de Colombia. PhD en Derecho por la Universidad de Lovaina (Bélgica), Magíster en Derecho Económico por la Universidad de Lovaina (Bélgica), Especialista en Tributación por la Universidad de los Andes (Colombia) y Certificado en Regulación de Servicios Públicos en la Universidad de la Florida (Estados Unidos). Director del Departamento en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Miembro de la Asociación Iberoamericana de Regulación (ASIER), Miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA) y Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía (ASIDE). Correo-e: Luis.moreno@uexternado.edu.co

*compliance*, en el medio de los dos, porque dada la complejidad y abundante regulación se ha hecho necesario que las organizaciones públicas y privadas implementen normas internas, es decir, procedimientos internos, protocolos, códigos de conducta y guías para dar cumplimiento a las normas y enfrentar los riesgos legales. Esto hace que el cumplimiento normativo (*compliance*) sea un complemento previo de la fiscalización y que esta función modifica su actuar enfocada en verificar los procedimientos internos, protocolos, códigos de conducta. La implementación del *compliance* al interior de las organizaciones públicas o privadas viene acompañado de un elemento de atenuación de penas y sanciones en el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, tanto en el ámbito del Derecho penal como en el Derecho Administrativo sancionatorio.

Veamos cada uno de estos componentes de la tríada regulatoria vinculados estrechamente los unos con los otros, para comprobar que los objetivos de la regulación no se alcanzarían sin la implementación del *compliance* por los sujetos regulados y sin la eficacia de la función administrativa de fiscalización.

## I. LA FUNCIÓN DE REGULACIÓN Y SUS NOVEDADES

De la función de Regulación, que es la función estatal de producir normas jurídicas, hay que destacar tres novedades: la primera, la unificación de los principios de la regulación; la segunda, las nuevas técnicas para diseñar la regulación, y la tercera, la mejora regulatoria (mejoras en los procedimientos de producción de normas jurídicas).

### A. PRINCIPIOS DE LA REGULACIÓN

Los principios, como bien lo señala Juan Carlos Cassagne (2015), no solo se limitan a servir de instrumentos de interpretación o incluso de integración del Derecho, sino también y en particular, son verdaderas garantías jurídicas que protegen tanto a los particulares como al mismo interés público.

La doctrina sobre la teoría de la regulación poco habla de los principios de la regulación. De la doctrina quienes han mencionado dichos principios son Andrés Betancor (2009) e Iñigo de Guayo (2017). Recogiendo lo que ellos exponen como principios y los que se han introducido en ciertas leyes de procedimiento administrativo como principios regulatorios y en leyes de mejora regulatoria, podemos decir que los principios de la regulación son los

siguientes: necesidad o subsidiaridad, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, racionalidad, coordinación, simplicidad, seguridad jurídica, transparencia, imparcialidad, participación y responsabilidad. Estos principios tienen como propósito orientar el actuar de los que realizan la regulación, esto es, lo que producen la normatividad de carácter general.

En Colombia, el ordenamiento jurídico no tiene unificados dichos principios regulatorios. De los mencionados, unos están mencionados en el artículo 209 de la Constitución Política para el ejercicio de la función administrativa en general como: el principio de coordinación, eficacia e imparcialidad. Otros los podemos aplicar del artículo 3 de la Ley 489 de 1998, que contiene los principios de la función administrativa, tales como: eficiencia, participación, transparencia y responsabilidad. Varios de todos los anteriores son desarrollados por la Ley 1437 de 2011 (CPACA). La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Consejo han reconocido los principios de proporcionalidad y racionalidad.

En España y El Salvador unifican dichos principios regulatorios en la ley de procedimientos administrativos. En México, dichos principios están unificados en la ley de mejora regulatoria.

## B. NUEVAS TÉCNICAS PARA DISEÑAR LA REGULACIÓN

El diseño de la regulación tiene que ver con la pregunta ¿cómo se regula? En efecto, existen diferentes técnicas de regulación o de diseñar la regulación y se usan diferentes técnicas según sean bienes privados o públicos o actividades económicas o no económicas e incluso actividades administrativas. Es de aclarar que las teorías de la regulación se han dedicado mayormente a diseñar diferentes técnicas de regulación para las actividades económicas. En las líneas siguientes se verá cuáles son estas técnicas, las cuales las podemos agrupar en dos categorías: primera, en los instrumentos de regulación y segunda, las forma de llevar a cabo la regulación.

### 1. INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN

Los instrumentos de regulación son los aspectos sobre lo que recae la decisión de regular. Si se trata de bienes privados y públicos se tienen en cuenta ciertos instrumentos como: la titularidad, derechos de propiedad, etc. (Moreno, 1999).

Si se trata de actividades económicas (mercado), los instrumentos van a depender de si estamos ante mercados monopólicos o mercado en competencia. Dichos instrumentos son: títulos habilitantes, declaratoria de servicio público, esencial u utilidad pública, régimen de las actividades, precio, inversiones, cantidad, calidad, etc. Si estamos ante actividades no económicas, sus instrumentos son los propios de cada actividad, por ejemplo, la regulación de la función pública utiliza instrumentos como el empleo público, la carrera administrativa, la responsabilidad, etc.

## 2. FORMA DE LLEVAR A CABO LA REGULACIÓN

Existen técnicas tradicionales y nuevas alternativas a las tradicionales de llevar a cabo la regulación.

Las técnicas tradicionales son: obligaciones, prohibiciones, restricciones de derechos, autorizaciones, establecimiento de derecho, trámites o procedimientos, permisos y sanciones. Las técnicas tradicionales, como dicen los economistas (Barry, 1989), son un régimen de regulación por comando y control que busca que se cumplan unas determinadas conductas o comportamientos.

Las nuevas alternativas de llevar a cabo la regulación buscan cambiar determinados comportamientos o conductas, mediante incentivos. Dichas alternativas regulatorias son: regulación por incentivos, regulación basada en la economía conductual, regulación por riesgos, regulación responsiva, autogeneración, corregulación, regulación por información o educación y regulación basada en el desempeño. Estas nuevas alternativas de regulación están en línea con el *compliance*, porque las organizaciones públicas y privadas, al implementar normas internas para gestionar internamente las conductas y comportamientos contenidas en regla generales dadas por el regulador y gestionar los riesgos, están en correspondencia con aquellas nuevas alternativas de regulación.

Las nuevas alternativas se configuran en herramientas que ayudan en el proceso complejo de cómo llevar a cabo las decisiones regulatorias. No sobra aclarar que la regulación por incentivos es la más conocida y tradicional técnica desde la teoría de la regulación. Las demás alternativas regulatorias se conocen por las nuevas teorías de la regulación (Baldwin, 2012) y hoy particularmente por los documentos de la OCDE sobre las alternativas a la regulación tradicional (Alternative to Traditional Regulation) (OCDE,

2002). Todas estas técnicas se podrían arropar dentro de la regulación por incentivos e incluso dentro de la regulación basada en la economía del comportamiento, y dentro de lo que se denomina regulación responsiva. Es posible que la adopción de estas alternativas de regulación a través de instrucciones, circulares, directrices, recomendaciones, guías y otras nos estén llevando a lo hoy se denomina *soft law*, como bien lo remarca Ariño (2018). Entonces nos preguntamos cuándo y qué circunstancias estarán presentes con el *hard law*.

### C. MEJORAS REGULATORIAS (PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS)

Hasta aquí tenemos que decir que hasta los años 90 se regulaba en un contexto de Estado empresario, pero no con el énfasis, ni las técnicas que se usan en el día de hoy. Después de los años 90 se hace énfasis en la regulación y con técnicas modernas de cómo regular y hoy con la incorporación de ciertos países de América Latina en la OCDE se habla de mejoras regulatorias precisamente para optimizar los procedimientos regulatorios tanto para expedir leyes, como actos administrativos de carácter general (reglamentos).

¿En qué se materializa la mejora regulatoria? La misma palabra lo dice: mejorar la regulación, y esto se concreta en la introducción de unas herramientas dentro del procedimientos para el ejercicio de la potestad normativa, como son: agenda regulatoria; análisis de impacto normativo; consulta pública; abogacía de la competencia; control administrativo; normas definitivas claras y trámites simplificados; inventario normativo (*stock*) y evaluación *expost* de los impactos de la norma. Se parte de la base de que con esas herramientas se mejora la calidad de las normas y de los trámites, para lograr, se reitera, una buena calidad de la regulación.

En Iberoamérica, México fue uno de los países que introdujo las mejoras regulatorias en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo (2000). Le sigue Colombia con el Decreto 2696 de 2004, para las comisiones de regulación y el Decreto 1345 de 2010 para ministerios y departamentos administrativos, y el Decreto 270 de 2017 (agenda regulatoria y consulta pública para un mayor número de autoridades), pero en la práctica su implementación no ha sido eficaz, constante e incremental. En el caso de España, introdujo las mejoras regulatorias en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39 de 2015) en los artículos

129 de la buena regulación y 130 de la evaluación normativa y adaptación de la normatividad vigente a los principios de buena regulación. En lo que respecta a Perú, encontramos el Decreto legislativo 1310 de diciembre de 2016 (análisis de calidad regulatoria del procedimiento administrativo) y el Decreto 1448 (que introduce la calidad de mejora regulatoria). Vuelve México en el año 2018 a expedir una Ley General de Mejora Regulatoria de México para toda la Administración Pública federal y estatal y el Congreso de la República (26 de abril de 2018). Finalmente, en El Salvador se implementan las mejoras regulatorias en el procedimiento para el ejercicio de potestad normativa en Ley de procedimientos administrativos de 2018 y en la Ley de Mejora Regulatoria del año 2018 que crea un sistema de mejora regulatoria, como lo hizo México.

En el contexto Iberoamericano, estamos evolucionando hacia las mejoras regulatorias. La propuesta de mejora regulatoria se ha convertido en una política pública en algunos países gracias a las recomendaciones de la OCDE de tener mejores y buenas prácticas de regulación. Dicha política la equiparan a la política fiscal y a la política monetaria. La política de mejoras regulatorias se ha implementado en leyes de mejora regulatoria o en leyes de procedimientos administrativos que inciden y modifican los procedimientos tradicionales de legislar y de expedir actos administrativos de carácter general o reglamentos. La principal herramienta de mejoras regulatorias es el análisis de impacto normativo, que es su sigla en inglés se conoce como RIA (Regulatory Impact Analysis ).

En Colombia, es de anotar que antes de la aprobación del Conpes 3816 de 2014 (CONPES, 2014) ya había una normatividad que responde a la necesidad de realizar análisis de impacto normativo. Destacamos algunas, como el Decreto 2696 de 2004, para las comisiones de regulación; la Ley 902 de 2005 y el Decreto 4669 de 2005, para implementación de nuevos trámites; el Decreto 1345 de 2010, el cual establece las directrices en materia de técnica normativa aplicables a ministerios y departamentos administrativos; la Ley 1340 de 2009, sobre la abogacía de la competencia, y el Decreto 1844 de 2013, para la expedición de reglamentos técnicos. Después del Conpes 3816 de 2014 sobre la mejora regulatoria, ha habido conciencia del tema, pero su implementación es baja. Las bases del Plan Nacional de Desarrollo de 2019 dieron unos lineamientos, pero hay que aclarar que la Ley 1955 de 2019, que contiene las reglas del plan, no incluye ninguna norma que permita introducir las mejoras regulatorias en la Ley 5 de 1995 donde se fija el



procedimiento de expedir leyes y ni en la Ley 1437 de 2011 (cpaca) para la expedición de actos administrativos generales (Moreno, 2018).

## II. COMPLIANCE (CUMPLIMIENTO NORMATIVO) COMO NOVEDAD

En relación con la palabra *compliance*<sup>1</sup> se han dado varios conceptos. Nosotros estamos de acuerdo con que *compliance* son las políticas y los procedimientos, protocolos, códigos de conducta que efectúan las organizaciones para dar cumplimiento a las normas y enfrentar los riesgos legales de los incumplimientos de las obligaciones. Por las razones anteriores, se reitera, nuestra afirmación que el *compliance* se encuentra en el medio entre regulación y fiscalización, porque aporta al cumplimiento de la regulación que es un objetivo de la regulación y colabora con la actividad administrativa de fiscalización cuya función es verificar el cumplimiento normativo o regulatorio. Es realmente una novedad en el Derecho Administrativo.

En otras palabras, si el *compliance* por parte de las organizaciones es eficaz, la regulación es eficaz y por consiguiente contribuye a reducir los costos de la fiscalización. El *compliance* se introduce en el sector público, lo cual contribuye a la buena administración y se implementa en el sector privado, lo cual conlleva el buen gobierno corporativo.

Es importante aclarar que *compliance* no solo hace referencia al cumplimiento de normas en materia penal, sino que verdaderamente abarca más ámbitos, como corrupción, protección de datos, control de lavados de activos, prevención de riesgos, corporativo, laboral, ambiental y otros tipos de obligaciones que se deben cumplir. Es de adicionar, como se dijo atrás, que las nuevas alternativas de regulación van en línea con el *compliance* porque aquellas precisamente apuntan a que las conductas o los comportamientos se adapten a unas reglas generales; precisamente, esto es posible gracias a la implementación de cumplimiento normativo al interior de las organizaciones.

Es de resaltar dos aspectos relacionados con el *compliance*: el primero, responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas y atenuación de penas y sanciones por la implementación de *compliance* al interior de las

---

1 Término que viene del Derecho anglosajón y que hace referencia a “*regulatory compliance*”.

organizaciones. El segundo, es de destacar la creación de ISO 19600 por parte de la organización internacional de normalización.

La expresión *compliance* en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se usa como lo afirma Gustavo A. Arocena (2018) para señalar: “la obligación de las personas jurídicas de establecer mecanismos internos que prevengan que determinadas personas físicas que ocupan puestos de relevancia dentro de ellas comentan un delito en beneficio de la empresa”. Se debe entender que los mecanismos internos serían normas internas, esto es, procedimientos, protocolos o códigos de conducta, entre otras, que tienen como propósito la prevención de delitos de las personas físicas que vayan en beneficio de la empresa, que luego ocasione una sanción penal a la persona jurídica. También la introducción del *compliance* en las personas jurídicas, como lo dice Gustavo A. Arocena, contribuye a que la persona jurídica pueda quedar exenta de responsabilidad penal o lograr una atenuación de la pena si antes del delito se demuestra que se han adoptado los procedimientos, protocolos o códigos de conducta internos de prevención de conductas delictuales.

En el campo de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, con lo cual las personas jurídicas reciben sanciones administrativas, se benefician con la implementación del *compliance* al interior de las personas jurídicas porque es objeto de las sanciones que son objeto de graduación. En el caso colombiano, vemos esto en la Ley 1778 de 2016, la cual regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por soborno a servidores públicos en transacciones comerciales internacionales. En dicha ley, se establecen sanciones administrativas a la matrices y filiales involucradas en actos de corrupción y establece graduación de dichas sanciones por la existencia, ejecución y efectividad de programas de transparencia y ética empresarial o de mecanismos anticorrupción al interior de la empresa, conforme a lo previsto en el numeral 7 del artículo 7 de la ley mencionada, beneficios de introducir *compliance* de ética empresarial y anticorrupción.

Es de aclarar que el artículo 23 de la Ley 1778 le confirió competencia a la Superintendencia de Sociedades de promover la adopción de tales programas de ética empresarial y a qué tipo de personas jurídicas. Con base en la anterior facultad, la Superintendencia establece en la Resolución 100-002657 de 25 de julio de 2016 modificada por la Resolución n.º 100-002657 de 25 de julio de 2016 que personas jurídicas están obligadas adoptar el programa de ética empresarial según el sector.

Ahora bien, la ISO 19600 es un sistema de gestión de *compliance* que busca con su implementación que se eviten los diferentes riesgos que se producen por el incumplimiento normativo.

Hay que tener en cuenta que ISO es la sigla que identifica la organización internacional de normalización, la cual es la encargada de crear la norma internacional ISO 19600. Su implementación es voluntaria. Se supone que ayuda a gestionar los riesgos de incumpliendo normativo.

### III. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACIÓN Y SUS NOVEDADES

La fiscalización es una actividad de la administración pública que tiene como finalidad verificar o comprobar el cumplimiento normativo e impedir que se materialicen los riesgos en las actividades objeto de fiscalización, los cuales afectan el interés general (Rebollo, 2013). Es de precisar que dicha actividad está separada de la potestad sancionatoria, pero interrelacionada porque, como veremos adelante, la potestad de fiscalización es *ex ante* y la potestad sancionatoria es *ex post*. Es de resaltar que en la actividad de fiscalización, como bien lo señala Zegarra (2018), están presentes unos principios, como legalidad, proporcionalidad e igualdad.

En Colombia, al día de hoy tenemos un régimen vigente, pero hacia futuro se visualizan ciertas novedades en la actividad administrativa de fiscalización, lo cual hay que destacar: primero, la unificación por parte de las OCDE de los principios de la fiscalización para promover el cumplimiento normativo. Segundo, la aplicación de técnicas modernas de auditorías y de técnicas de verificación de cumplimiento de normas y contratos para que la fiscalización se base en evidencia, con el propósito de lograr mejores resultados y evitar incurrir en daños antijurídicos. Tercero, la fiscalización focalizada a verificar las normas internas de *compliance* (procedimientos, protocolos, código de conducta,) implementadas por las organizaciones.

La función o potestad de fiscalización se conoce en Colombia como función o potestad de inspección, vigilancia y control. La potestad de fiscalización (inspección, vigilancia y control) por parte de la Administración Pública se encuentra consignada en los siguientes artículos de la Constitución: 67; 80; 150, numeral 8; 189, numerales, 22, 24 y 26; 333; 335; 365; 370; 372, entre otros. De estas normas se derivan la potestad administrativa de fiscalización (inspección, vigilancia y control) de actividades económicas,

actividades no económicas y de bienes privados y públicos que busca verificar el grado de cumplimiento de los particulares del conjunto de normas y el comportamiento o conductas de los particulares en las diferentes actividades que desempeñan. También, previenen y adoptan medidas correctivas pertinentes frente a las conductas de los particulares. En otras palabras, es una intervención *ex ante* de la Administración Pública con la que se protege el interés general en las actividades o sectores. Dicha función está sujeta a reserva de ley y es realizada, como regla general, por las superintendencias o unidades administrativas especiales (Santofimio, 2017).

Mientras que la potestad sancionatoria es una intervención *ex post*, también sujeta a reserva de ley, ejercida por superintendencias o unidades administrativas especiales, como se ha dicho, tiene como fin sancionar las conductas que se aparten del ordenamiento jurídico específico o general. La función sancionatoria de la Administración tiene su propia entidad frente a la potestad de fiscalización (inspección, vigilancia y control), aunque se debe reconocer que, producto del ejercicio de esta facultad, la Administración deriva información para el inicio de oficio de su potestad sancionatoria. El fundamento constitucional de esta potestad es un conjunto de normas constitucionales tales como los artículos 1, 2, 6, 29, 95. Entretanto, la función de fiscalización (inspección, vigilancia y control) tiene como fundamento otras normas constitucionales, como ya se dijo.

El estándar es el que la Administración ejerza primero sus funciones de inspección, vigilancia y control para que los particulares tengan oportunidad de corregir, enderezar sus comportamientos, sus decisiones o sus actuaciones preventivamente. En el caso de que sus conductas quebranten el orden jurídico, la actividad que se activa por parte de la Administración es su función sancionatoria.

Es de precisar que la función de inspección debería estar orientada a solicitar información a todos los particulares que desarrollan una actividad y, con base en esa información, se supone que se deberían derivar alertas administrativas, financieras, técnicas, jurídicas y prevención de problemas de abusos contra los consumidores o usuarios que le indiquen cuáles deben pasar a la función de vigilancia por parte de la Administración. En la función de vigilancia, la Administración Pública debería hacer un seguimiento más intenso a los particulares que se encuentren en cierto grado de alertas. Si el particular, pese a tener una vigilancia intensa, continúa con las alertas indicadas anteriormente, hay justificación para que pase a control. En la

función de control, la Administración Pública tomaría control o posesión de las empresas, esto es, sería una intervención empresarial que tendría dos propósitos: toma de posesión o intervención, para administrar y así contribuir a conjurar las dificultades de la empresa o el ente; o una toma de posesión o intervención para liquidación de las empresas, cuando no se logre realmente, con todos los esfuerzos, conjurar la crisis de la empresa o del ente.

Este régimen vigente de fiscalización requiere de ciertas mejoras porque en la realidad en ciertas actividades económicas o actividades no económicas se evidencian incumplimientos normativos, reinando la informalidad; por tal razón, es oportuno las propuestas de mejoramiento de la función administrativa de fiscalización. Es de destacar, como se dijo atrás, la unificación por parte de las OCDE de los principios de la fiscalización para promover el cumplimiento normativo, consignados en 12 criterios en el documento *OCDE Regulatoria Enforcement and Inspections Toolkit* (OCDE, *Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit*, OCDE publishing, Paris, 2018). Las herramientas propuestas serán de gran utilidad para mejorar la fiscalización y de esa manera lograr una buena administración en esta materia.

También contribuirá a mejorar la función administrativa de fiscalización, la aplicación de técnicas modernas de auditorías y de técnicas de verificación de cumplimiento de normas y contratos para que la fiscalización se base en evidencia con el propósito de lograr mejores resultados y así evitar incurrir en daños antijurídicos. De igual forma, las guías de implementación con los sujetos de control. Básicamente, la fiscalización estaría orientada a verificar las normas internas (procedimientos, protocolos, código de conducta,) implementadas por las organizaciones.

## CONCLUSIONES

Queda comprobado que la función de regulación por sí sola no lograría que se cumplieran los objetivos de interés general que, necesariamente, debe estar acompañada de la función de fiscalización, pero esta última función debe contar con mejores prácticas en su ejercicio para que se cumplan los objetivos de la regulación; en otras palabras, si la fiscalización falla, la regulación es ineficaz. Por ello, es transcendental lo que propone la OCDE de buenas prácticas para mejorar las herramientas de fiscalización del cumplimiento normativo en mejora de las funciones de las entidades competentes.

Ahora bien, la implementación del *compliance* al interior de las organizaciones públicas y privadas sujetas de regulación y fiscalización es una innovación para destacar en el Derecho Administrativo, porque en cierta forma se traslada la responsabilidad de velar por el cumplimiento normativo en las organizaciones. Estas asumen el cometido de introducir normas internas materializadas en procedimientos, protocolos, códigos de conducta al interior de su organización para gestionar el cumplimiento normativo. Por esa razón, se afirma en este escrito que el *compliance* se ubica entre la función de regulación y la función de fiscalización, esto es, en el centro de las dos funciones administrativas.

En consecuencia, como las tres, esto es, la función de regulación, el *compliance* y la función de fiscalización, se interrelacionan y tienen los mismos propósitos comunes, como lo es el *cumplimiento normativo*, entonces, componen una tríada regulatoria para el cumplimiento normativo. Esta tríada regulatoria es una innovación del Derecho Administrativo que se ha venido formando espontáneamente y que está en construcción.

#### REFERENCIAS

- ARIÑO ORTIZ, GASPAR (2018). Veinticinco años de regulación económica. Enseñanzas y conclusiones. En: MORÓN, JUAN CARLOS y DANOS ORDÓÑEZ, JUAN CARLOS (coord.) *Estudios de Derecho Administrativo. El Derecho Administrativo Iberoamericano Innovación y reforma. Libro homenaje al profesor Juan Carlos Cassagne*. Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica.
- AROCENA, G. (2018). *Criminal Compliance. Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas*. Lima: Ideas Solucion Editorial.
- BALDWIN, R. (2012). *Risk Based regulation. Understanding regulation*. Oxford.
- BARRY, M. (1989). *La Economía política de la regulación*. Fondo de Cultura Económica.
- BETANCOUR, A. (2009). *Mejorar la regulación*. Marcial Pons.
- CASSAGNE, J. (2015). *Los grandes principios del Derecho público. Constitucional y administrativo la ley*. Buenos Aires: Thomson reuters.
- CONPES (2014). *CONPES 3816*.
- DEL GUAYO CASTIELLA, I. (2017). *Regulación*. Madrid: Marcial Pons.

- IZQUIERDO CARRASCO, M. (2019). *Fiscalización, Supervisión e inspección administrativa: aproximación conceptual crítica y caracteres generales en el derecho peruano. La proyección del Derecho Administrativo Peruano* (D. Z. (coordinador). Perú: Ed.Lima.
- MORENO, LUIS FERNEY (1999). Regulación económica con énfasis en la regulación de los servicios públicos domiciliarios. *Homo Iuris Ensayos de Derecho Contemporáneo*, Universidad Externado de Colombia n.º 1 (agosto) (305-618).
- MORENO, LUIS FERNEY (2018). El análisis de impacto normativo, una innovación para el Derecho Administrativo. Ámbito jurídico. Disponible en: <https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/administrativo-y-contratacion/el-analisis-de-impacto-normativo-una-innovacion>
- OCDE (2002). *OECD Report. Alternatives to Traditional Regulation. This report was prepared by Mr. Glen Hepburn, who worked for the Regulatory Policy Division and OCDE. Regulatory policies in OCDE countries ANNEX II*. OCDE.
- OCDE (2018). *Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit*, OCDE publishing. Paris.
- REBOLLO PUIG, MANUEL (2013). La actividad inspectora. En: DIEZ SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ (coord). *Función inspectora*. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.
- SANTOFIMIO, JAIME ORLANDO (2017). *Compendio de Derecho Administrativo*. Ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- ZEGARRA VALDIVIA, DIEGO (2018). La definición de la actividad de fiscalización en la ley de procedimiento administrativo general peruana. En: MORÓN, JUAN CARLOS y DANOS ORDÓÑEZ, JUAN CARLOS (coord.) *Estudios de Derecho Administrativo. El Derecho Administrativo Iberoamericano Innovación y reforma. Libro homenaje al profesor Juan Carlos Cassagne*. Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica.